

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos RIT 170-2024 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, los jueces titulares señora María Inés González Moraga, señor Carlos Escobar Salazar y señora Claudia Bugueño Juárez, dictaron sentencia con fecha veintitrés de septiembre del año en curso, que condenó al acusado Jeremías Israel Castillo Navarro a: 1) la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales correspondientes, como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego consumado, sancionado en el artículo 3° en relación al 14, ambos de la Ley 17.798; 2) a la pena de tres años y un día, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante la condena, como autor del delito de disparo injustificado de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 14 D de la Ley 17.798; y 3) a la pena de multa de una unidad tributaria mensual, en calidad de autor de la falta de consumo, previsto y sancionado en el artículo 50 de la Ley 20.000; perpetrados todos el 8 de agosto de 2023, en la comuna de Lo Barnechea.

No se le concedió pena sustitutiva alguna de las contempladas en la ley N°18.216, por lo que deberá cumplir las condenas en forma efectiva, reconociéndosele como abono a su cumplimiento el tiempo que ha estado privado de libertad en la causa.

En contra de la referida sentencia el abogado defensor penal privado Juan Carlos Gómez Becerra, por el condenado Jeremías Israel Castillo Navarro, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal.

El recurrente solicita se invalide tanto la sentencia recurrida como el juicio oral en que se dictó, disponiendo la realización de uno nuevo ante tribunal no inhabilitado.

En audiencia del día 19 de noviembre de 2024, comparecieron los representantes del sentenciado y del Ministerio Público, fijándose la audiencia de comunicación de la sentencia para el día de hoy.

Considerando:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBPFXRXRVJ

Primero: Que se invoca por el recurso la causal prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, en este caso los de la letra c), en relación a lo dispuesto en el artículo 297, ambos del texto legal citado, solicitando se declare la nulidad del juicio y de la sentencia, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento y la remisión a un tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral.

Señala el recurrente que para alcanzar el grado de convicción legal sobre la existencia del delito de disparo injustificado, en el que se atribuye participación a su representado en calidad de autor, los sentenciadores han efectuado una errónea valoración de los medios de prueba allegados al juicio oral por el Ministerio Público por cuanto han infringido el principio de la lógica de razón suficiente.

Sostiene que la vulneración a tal principio se produce en la valoración de la declaración del imputado en el juicio oral, restándole seriedad y verosimilitud. Así como de la prueba de cargo, consistente en las declaraciones de los funcionarios policiales, los cuales señalan que *“escucharon un estruendo, presumiblemente de arma de fuego”*, no estableciendo con absoluta certeza las características del mismo, ni menos que era propio de un disparo efectuado por el condenado. Por último, se afectaría el principio en comento al considerar la declaración de los testigos que señalan *“Cuando huyó, él portaba el arma, y la PDI lo persigue”*, *estimando suficientes tales dichos como* para entender que por el sólo hecho de portar el arma al momento de la persecución su defendido fuera el causante del estruendo.

Agrega que no existe certeza respecto de los hechos fácticos a partir de los cuales se derivan las consecuencias jurídicas de la sentencia, pues no se ha logrado obtener certeza más allá de toda duda razonable de que su representado fue quien efectuó el disparo, ya que el juez formó su convicción a partir de declaraciones ambiguas.

Indica que los jueces señalaron que la defensa logró revelar contradicciones en los testimonios de los policías, quienes, en calidad de testigos, afirmaron haber visto la deflagración de pólvora, aunque esto no



fue mencionado durante la investigación ni en el momento de la detención del condenado, de modo que este punto no puede ser estimado como probado. No obstante, el tribunal estableció como probado que existió un disparo, dado que los testigos mencionados manifestaron desde el principio haber escuchado un sonido o estruendo, presumiblemente proveniente de un arma de fuego.

Explica que a pesar de las contradicciones señaladas, el tribunal consideró que esta controversia no fue suficiente para generar una duda razonable sobre la autoría del disparo, ya que el único hecho acreditado fue la escucha del estruendo, además de la vainilla percutida y la proximidad temporal entre la acción y la visión de los policías observando al encausado con el arma de fuego. Sin embargo, tal análisis deja importantes dudas sobre los hechos, ya que tanto las pruebas como los relatos presentados resultaron débiles, dejando un margen considerable de duda respecto de la autoría del disparo y la existencia del mismo.

Adiciona que los juzgadores condenaron al encausado sin lograr acreditar –exactamente- los hechos materia de la acusación, infringiendo así también el principio de congruencia.

Sostiene que la correcta y completa valoración de la prueba rendida debió llevar al tribunal a concluir que no se probó la existencia del delito por el cual fue acusado el imputado, específicamente por no acreditarse la autoría ni existencia del disparo. En consecuencia, conforme a lo indicado en el artículo 340 del Código Procesal Penal, se debió absolver al encartado de la acusación formulada en su contra por el delito de disparo injustificado contemplado en el artículo 14 letra D), de la ley N° 17.798.

Segundo: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: (...) e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”. Por su parte, el artículo 342 del mismo código, en su letra c) prescribe: “La sentencia definitiva contendrá: (...) c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con



lo dispuesto en el artículo 297”.

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

Tercero: Que, al respecto, cabe señalar que la causal de nulidad planteada, protege la garantía de la sentencia motivada y la razonabilidad de la misma, en la medida que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Sin embargo, controlar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no puede ser entendido como un ejercicio que lleve a valorar nuevamente los hechos. Esto excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. La revisión de la aplicación del sistema conforme al cual la ley manda valorar la prueba rendida en el juicio equivale a comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone la sana crítica, es decir, examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba a la hora de arribar a la decisión contenida en la sentencia. Según ello, la causal de nulidad en comento conlleva analizar la forma en que se ha considerado o apreciado la prueba, pero no el contenido fáctico de esa ponderación.

Cuarto: Que el deber de motivación de la sentencia importa explicitar una justificación específica de la decisión adoptada respecto de los hechos que se han tenido o no por probados, de modo de permitir



comprender lo que racionalmente se ha resuelto y facilitar a la vez la revisión jurisdiccional de sus fundamentos.

De este modo y considerando que el sistema procesal chileno reserva al tribunal de la instancia la apreciación de la prueba, para que prospere la causal, debe constarse la ausencia de una exposición clara, lógica y completa de los hechos, en términos que impidan entender cuáles fueron los que el tribunal tuvo por acreditados para construir un relato que conduzca, de manera racional y lógica, a la calificación jurídica de los antecedentes fácticos y las circunstancias que sustentan la decisión. En tal sentido, la libre apreciación de la prueba reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Quinto: Que como se ha dicho, nuestro sistema procesal penal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida, el establecimiento del hecho punible y la participación, imponiéndoles la obligación de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, parámetros que se definen como *‘las reglas del correcto entendimiento humano’*. En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal radica en la revisión del razonamiento que han seguido los jueces del fondo en el establecimiento de los hechos y de la participación y comprobar que en el citado proceso no se hayan apartado de los parámetros del citado artículo 297 del Código Procesal Penal.

Sexto: Que el fallo impugnado en el motivo undécimo tuvo por establecido que “El día 08 de agosto de 2023 aproximadamente a las 21:00 horas, personal policial de la BICRIM Lo Barnechea realizaba diligencias investigativas asociadas a la ley 20.000 en la población Lo Ermita comuna



de Lo Barnechea, instantes en que observan al imputado JEREMIAS CASTILLO NAVARRO con un arma de fuego tipo escopeta en su poder, el cual huía por calle Betania en dirección al norte, comuna de Lo Barnechea, luego de haber efectuado de manera injustificada y con riesgo a las personas del sector, un disparo con el arma que portaba.

Por lo anterior, personal policial sale en persecución del imputado CASTILLO NAVARRO, dándole alcance en calle Ermita de San Antonio con calle Nazaret, comuna de Lo Barnechea, en donde lo sorprenden portando y guardando sin la competente autorización: 01 arma de fuego tipo escopeta, marca Winchester, modelo 37, calibre 16, Serie 122333501, la que se encontraba adaptada y modificada mediante el recorte de su cañón y culata, manteniendo en el interior de su recámara 01 vainilla percutida calibre 16, alojada producto del disparo realizado por el imputado”.

Estos hechos fueron calificados como constitutivos de los delitos consumados de disparo injustificado con arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 14 D de la Ley 17.798; porte de arma de fuego prohibida previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley 17.798; y la falta del artículo 50 de la Ley 20.000, todos en carácter de consumados.

En lo concerniente al delito de disparo injustificado de arma de fuego, al que se refiere el recurso de nulidad, se concluye en el considerando duodécimo que se encuentra acreditada la autoría del acusado Jeremías Castillo Navarro, por los dichos de los funcionarios policiales, quienes fueron testigos presenciales, ya que sorprendieron al mismo, sosteniendo el arma de fuego, circunstancia que fue corroborada por el propio encartado, quien confesó encontrarse portando dicho armamento y huir cuando vio a los policías en la vía pública.

Séptimo: Que la sentencia impugna -en su motivo undécimo- se refiere a la discusión planteada por los intervinientes en cuanto a la ocurrencia o no de un disparo y la autoría de tal conducta por parte del acusado, señalando que su defensa, sostuvo que éste únicamente habría portado el arma, pero que no la disparó, aduciendo que el mismo no se encontraba solo sino con un tercero, negando el haber disparado dicha arma. Al respecto, considera que el hecho negativo de no haberse efectuado



un disparo con la escopeta Winchester, modelo 37, calibre 16, el mismo día de los hechos, fue descartado por los propios dichos del perito balístico y los funcionarios policiales. Estos últimos que “depusieron que el arma de fuego fue levantada del sitio del suceso con un cartucho en su recamara, como la vainilla incautada, también calibre 16 y que al realizar la prueba de funcionamiento con otra vainilla, por parte del perito antes referido, se logró establecer que esa arma estaba apta para el disparo y que la vainilla fue percutida por la escopeta anteriormente descrita.

Afirman los sentenciadores que bajo la premisa anterior, cobran relevancia los dichos de los funcionarios policiales, quienes afirmaron que mientras realizaban vigilancia a un domicilio por un delito de tráfico de drogas en calle Emaús de comuna Lo Barnechea, “*escucharon un estruendo, presumiblemente de arma de fuego*”, que los hizo dirigirse a calle Betania (a la vuelta de donde estaban), momento en que ven al acusado Castillo Navarro corriendo con el arma en su mano junto a otro individuo.

Expresan que, además, se acreditó con sus dichos que escucharon un fuerte ruido como un disparo, porque de no haberlo escuchado, habrían seguido haciendo la vigilancia al domicilio y es precisamente ese ruido, el que los motiva a trasladarse en forma inmediata hacia el lugar de origen del mismo. Así las cosas, dicha inmediatez a la escucha del ruido, es lo que permite, imputarle la autoría del disparo injustificado al acusado Jeremías Castillo Navarro, por cuanto habiéndose acreditado que se realizó un disparo minutos antes, precisamente era el encartado quien corría con el arma de fuego, lo que no hace sino presumir que fue el hechor de haberla percutido.

Agregan que el propio imputado reconoció que portaba el arma y que cuando vio a los policías, emprendió la huida... “*le dijeron que iban a disparar a su casa, que lo iban a matar, por eso tenía un arma de fuego, cuando vio a la Policía de Investigaciones (PDI) se dio a la fuga.*” En otras palabras sus dichos resultaron plenamente concordantes y coherentes con las declaraciones policiales en cuanto que una vez vistos por el encartado, éste huye del lugar, siendo dable presumir que frente al disparo sólo le resta huir para no ser aprehendido.

Adicionan que de no haberse escuchado tal ruido por los policías no



se habrían movilizado al lugar, con lo que la tesis de haber sido un tercero el autor del disparo carece de plausibilidad, ya que es el propio imputado quien portaba el arma y corre cuando visualiza a los policías, no existiendo en los antecedentes- ni siquiera de los propios dichos del acusado- que se hubiera producido un intercambio de armamento con este tercero, resultando más apegado a la lógica sostener que quien la portaba fuera el autor del disparo.

Además, consideran que este tipo de conducta contraria a derecho y en especial sobre el porte de un arma de fuego, no resulta ajena al acusado, según se desprende de los dichos de uno de los policías, quien refirió que se le incautó el celular al encausado, encontrándose diversas fotografías del mismo portando armas de fuego, según se pudo observar en la prueba aportada.

Refieren por último, en cuanto a las contradicciones de los policías, reveladas por la defensa, respecto de sus declaraciones anteriores donde no habrían señalado que vieron la deflagración de la pólvora como sí lo dijeron en audiencia de juicio oral, afirman que efectivamente no es un punto que se pueda valorar como probado, ya que no lo expusieron desde un inicio, a diferencia de sólo haber escuchado un sonido o estruendo presumiblemente de arma de fuego, como sí lo expresó la policía Farías y los otros funcionarios. Sin embargo, el tribunal considera que tal controversia no fue suficiente para levantar una duda razonable sobre el hechor del disparo, ya que siendo la escucha lo único acreditado, esto, junto a la existencia de una vainilla percutida y la inmediatez entre la acción y la visión de los policías portando el arma de fuego al encartado, es lo que permitió inferir su autoría en el disparo de la misma.

Octavo: Que del análisis del arbitrio en estudio, confrontados sus argumentos con la sentencia atacada, se descarta la falta de fundamentación alegada, no siendo efectiva la conculcación al principio de la lógica de la razón suficiente y de la corroboración, respecto del valor dado a la declaración del encausado y los testigos, toda vez que la sentenciadora expresa las consideraciones y fundamentos que la justifican -razonablemente- y dentro por lo demás del ámbito de sus atribuciones de ponderación.



Noveno: Que de otro lado los planteamientos vertidos por el impugnante dicen relación con una disconformidad con la labor de ponderación efectuada por los sentenciadores, más no con la inexistencia de *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”,* como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, a lo que debe sumarse que –como ya expuso- los sentenciadores del grado explicitaron de manera detallada y precisa los argumentos que les permitieron concluir como lo hizo sobre la calificación de los hechos en el tipo penal asignado, dentro de las facultades propias del proceso de apreciación, sin que ello implique una falta de consideración probatoria o falta al principio de razón suficiente.

Décimo: Que, en consecuencia, los sentenciadores, en las motivaciones de su sentencia, dieron correcta aplicación a lo estatuido en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, analizando y concluyendo los motivos por los que se dieron por probados los hechos materia de la acusación, y la participación, en calidad de autor que le cupo al encartado, en el delito por el cual fue condenado y que es materia del recurso intentado.

Undécimo: Que conforme lo antes expuesto, y careciendo de sustento el único acápite del recurso de nulidad en análisis, éste no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Privado Juan Carlos Gómez Becerra, en representación de Jeremías Israel Castillo Navarro, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre del año en curso dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa, RIT 170-2024, RUC: 2300857024-8, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Carolina Brengi Zunino.

Penal N° 5871-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBPFXRXRXVJ

No firma la Ministra señora Villadangos, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBPFXRXRXVJ

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBPFXRXRXVJ